

# El Comercio

EDITORIAL

## Inamistosa interferencia boliviana

Es una cuestión de soberanía y de derecho al crecimiento y al desarrollo en la que no podemos transar de ninguna manera. Por ello, saludamos que el canciller José Antonio García Belaunde haya reafirmado que el Perú no supeditará su política comercial a la ciega oposición de Bolivia.

Por lo pronto, es positivo que se insista explorando mecanismos legales en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde la postura del Ecuador ha variado adecuadamente. Ahora, los vecinos del norte apoyarían el pedido peruano de suspender temporalmente la vigencia de la Decisión 486, sobre el régimen común andino de propiedad industrial, de modo que podamos implementar y acceder fluidamente a los beneficios del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Debemos recordar que en la CAN se ha hecho cada vez más evidente la fractura ideológica entre el Perú y Colombia por un lado, que apoyan principios liberales y de economía social de mercado, y Bolivia y Ecuador, del otro lado, que se adhieren a obsoletas ideologías socialistas, estatistas y hasta confiscatorias.

Podemos discrepar de la postura boliviana, pero la respetamos.

Cada gobierno es libre de decidir lo que mejor le parezca, de acuerdo con su doctrina y necesidades nacionales. Sin embargo, de allí a pretender interferir o imponer su modelo ideológico a otros países, y de perjudicarlos de modo tan burdo, hay una enorme distancia.

Ello revelaría un ánimo inamistoso y perjudicial que no podemos tolerar, pero que lamentablemente parece haberse convertido en la tónica del gobierno de Evo Morales, que previamente ha petardeado las negociaciones con la Unión Europea, ha acusado al Perú de ser colaborador de la CIA y se ha permitido gruesos calificativos para nuestro presidente.

El Perú no puede aceptar más injerencias ni trabas del régimen altiplánico, que contradicen una larga trayectoria histórica de hermandad y cooperación entre vecinos tan similares. Por lo mismo, dejando un margen para la reflexión y la sensatez, esperamos que finalmente Bolivia se abstenga en la votación para modificar la Decisión 486. Mas, en caso de que votara en contra, el Perú soberano tiene el derecho y la vía libre para tomar las decisiones más convenientes en su política comercial de apertura y en su TLC con EE.UU., del que se esperan beneficios ostensibles para todos. ■■

## Por un mayor compromiso con la cultura del reciclaje

Es importante que los poderes públicos, la sociedad civil y los ciudadanos nos unamos a la campaña, que bien podría liderar el Ministerio del Ambiente, de lucha contra los efectos del cambio climático. Todo aporte es bienvenido, sobre todo en actividades determinantes, como las relacionadas con el reciclaje de residuos.

Varias universidades y colegios han demostrado que se puede educar a los estudiantes a segregar los desperdicios que generan. Y, aunque los programas municipales de reciclaje son limitados, hay iniciativas positivas en las municipalidades de Surco, San Borja, Villa El Salvador, el Callao, Magdalena, La Victoria, entre otras.

Pero esto no es suficiente. El desorden en el recojo de la basura no es exclusivo de Lima —que genera siete mil toneladas de basura al día—, sino que abate a todo el país. Ello obliga a los concejos provinciales y distritales a trabajar aun más para mejorar el recojo, construir plantas de clasificación de residuos, educar a los vecinos y lanzar programas como el bono verde con descuentos para el pago de impuestos. La lucha contra la contaminación y el calentamiento global nos compromete a todos los ciudadanos civilizados. ■■

### EL CONGRESO COMO INSTRUMENTO DE PRESIÓN A LOS OPOSITORES

## Represalias

Fernando Rospigliosi  
Ex ministro del Interior



Las tendencias autoritarias del Gobierno se acentúan en proporción directa a sus fracasos políticos. La economía, en manos de técnicos independientes y liberales como Luis Carranza, en el Ministerio de Economía, o Julio Velarde, en el Banco Central de Reserva, marcha muy bien. La política, en manos de trajinados militantes apristas, camina muy mal.

El descalabro del Gobierno en Moquegua es un ejemplo de ello. Un monumento a la imprevisión y la improvisación, que ha producido daños enormes al país y nos o las regiones involucradas. Porque el mal ejemplo se va a extender a otros lugares, alimentando a corrientes políticas interesadas en provocar desórdenes y exacerbar el descontento de sectores de la población.

El Gobierno, en lugar de evaluar con objetividad —y una dosis de humildad— sus errores y corregirlos, recurre hasta ahora a dos expedientes. Uno, echarle la culpa de sus yerros a otros (en el colmo del absurdo dicen, por ejemplo, que el gobierno anterior es responsable del problema de Moquegua). Dos, tratar de silenciar a los críticos que señalan sus desatinos.

En este último punto hay que reconocer que han avanzado considerablemente. Usando recur-

sos tortuosos, han logrado silenciar o adormecer a parte de sus adversarios.

Uno de sus instrumentos es la utilización del Congreso para acusar arteramente a sus críticos y someterlos al tormento de un proceso judicial.

Es lo que me acaba de suceder. El lunes 16, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó sorprendentemente una absurda denuncia presentada por el ministro fujimorista, ex congresista toledista y empresario textil ampliamente conocido en el mundo de los negocios Jorge Mufarech.

“Es inaceptable que utilicen su poder en el Congreso para tratar de amedrentarme”

En síntesis, Mufarech me acusa de haber favorecido indebidamente a Pro Ética, institución con la que firmé dos convenios a principios del 2002 cuando era ministro del Interior. Pro Ética es la filial nacional de la prestigiosa Transparencia Internacional y estaba presidida en ese entonces por el ex procurador anticorrupción José Ugaz, otro de los blancos favoritos de Mufarech.

El asunto es que como consecuencia de esos convenios, ni

Ugaz ni Pro Ética recibieron un centavo del Ministerio del Interior ni del Estado. No hay materia alguna para la acusación.

A pesar de eso, Mufarech, usando sus influencias, ha removido una y otra vez la denuncia en el Congreso, que es a su vez una venganza contra mí. En efecto, su denuncia se produjo después de que yo revelara que él había usado indebidamente su cargo de congresista para cuestionar la licitación de uniformes policiales, realizada por Gino Costa, cuando Mufarech había tenido interés directo en vender sus telas a la policía, sin éxito.

A tal punto carece de fundamento la denuncia de Mufarech, que el congresista aprista José Vargas, ponente del tema en la subcomisión del Congreso, consideró que no debería aceptarse. Sin embargo, sorprendentemente el lunes pasado, la subcomisión la aprobó a instancias del congresista aprista Aurelio Pastor y con votos del fujimorismo y del humalismo.

Sin duda, no es coincidencia que esto se haya producido al día siguiente de que publiqué en mi columna dominical de “Perú.21” un artículo, “Abusos y errores”, en el que critico al ministro del Interior —que a la vez es congresista y dirigente aprista— por el raudal de desaciertos del que es responsable en los asuntos de seguridad ciudadana. El comportamiento en la subcomisión de la defensora del corrupto gobierno de Fujimori y Montesinos no es sorpresa. También hay que recordar que los seguidores de Ollanta Humala no me aprecian. El 25 de marzo la bancada humalista emitió un insólito comunicado en el que rechazaban las opiniones que yo había emitido en un artículo.

Los humalistas dicen que en ese artículo yo critico “la falta de previsión mostrada por el Gobierno en su conjunto y, sobre todo, por el Ministerio del Interior frente a la ola de protestas que sacuden el país”. Pero lo que les duele es que yo afirmo que Hugo Chávez apoya los disturbios usando como instrumento a Humala y sus congresistas.

Es comprensible que apristas, fujimoristas y humalistas discrepen de mis opiniones. Pero es inaceptable que utilicen su poder en el Congreso para tratar de amedrentarme y silenciarme con acusaciones absurdas y prevenir a otros de lo que les ocurriría si hacen algo similar. ■■

### HUMOR PROFANO

Por Molina



### EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO

## Una sede para el APEC

José Miguel Morales  
Presidente del comité organizador de la cumbre del APEC



Hace unos días, el señor Fernando de Szyszlo publicó un artículo en el que critica la decisión del Gobierno de elegir el Cuartel General del Ejército como sede de la reunión del APEC, arguyendo que “por razones incomprensibles” se ha elegido un edificio “lleno de malos recuerdos”, refiriéndose explícitamente al libro de Ricardo Uceda que describe “los excesos que se supone se cometieron” en dicho lugar. Paradójicamente, el señor Szyszlo hace también un llamado a que “el tiempo borre las asociaciones que nos provoca”.

Comprendiendo totalmente la enorme sensibilidad de un artista como Fernando de Szyszlo, considero que ya es momento de que el Perú, sin olvidar las lecciones del pasado, sea capaz de abocarse a la tarea de construir un futuro.

El Museo de la Nación, originalmente concebido como Mi-

nisterio de Pesquería en la época de la dictadura militar, se ha convertido hoy en el escenario ideal para eventos culturales e incluso reuniones de Estado como la Cumbre ALC-UE. Por ello también se tiene previsto que algunas reuniones del APEC, como la cumbre de las pyme o el foro de inversiones, sean celebradas

“Como responsable de la organización de la cumbre empresarial, considero que vetar o satanizar una sede no es un triunfo para la democracia”

allí. En esa misma línea, el Cuartel General del Ejército es solo una sede, un edificio. Lo relevante no es el espacio, sino lo que en él ocurre: lo que allí se supone que sucedió en el pasado, de ser cierto, nos afecta y nos ocasiona pesar y vergüenza. Lo que allí se

espera que ocurra en el futuro debería llenarnos de orgullo.

¿Qué mejor muestra de la apertura y del retorno a la democracia? ¿Qué mejor muestra de una Fuerzas Armadas al servicio de la ciudadanía que poner a disposición su sede central para un evento que, como el mismo autor lo define, “versará sobre intercambio comercial y cultural y que tiende a afirmar la paz y la amistad entre los pueblos”?

Considero que allí está el triunfo de la democracia; no en vetar o satanizar lugares que finalmente son solo eso: espacios donde lo que importa son las personas que los ocupan y las actividades que desarrollan.

Siendo responsable de la organización de la cumbre empresarial que se llevará a cabo en las instalaciones del Cuartel General del Ejército, considero que vetar o satanizar una sede no es un triunfo para la democracia. Por el contrario, la buena disposición de las Fuerzas Armadas, el apoyo permanente para poner su local a entera disposición de la sociedad civil, eso sí, es un logro de la democracia. ■■



### rincón del autor

Jaime de Althaus Guarderas



La victoria de los moqueguanos se convertirá en frustración antisistema nuevamente si el gobierno regional ejecuta solo el 24% del canon, como el 2007

## La revolución del canon

La única manera positiva de mirar los acontecimientos de Moquegua sería decir que estamos ante una revolución por la inclusión en el mercado, en el sistema: una explosión social para exigir la devolución de los recursos que permitirían desarrollar la infraestructura necesaria para producir más y mejorar los niveles de vida. Habría una suerte de codicia sociológica ante la expectativa frustrada de unos montos inesperadamente altos y sin prece-

dentos de canon minero.

Si la erupción volcánica de movilización y violencia social que asustó y ridiculizó hasta a la propia policía expresara la magnitud del deseo de integración y progreso, sería extraordinario. Pero expresa también, seguramente, designios políticos más oscuros y paradójicamente antisistema que aprovechan décadas de frustración ante la ineficacia corrupta y clamorosa del Estado, de la autoridad y del sistema de representación. De la democracia

realmente existente, en suma.

Es lo que se manifiesta en la última encuesta nacional de la Universidad Católica. Es notoria la insatisfacción del sur del país con la democracia, el sistema y el Gobierno. Si un 52% está insatisfecho con la democracia en el ámbito nacional, en el sur ese porcentaje se alza a un 64%. ¡En el sur (y en el centro) suman más los que piensan que a veces un gobierno autoritario o una dictadura son preferibles a una democracia y los que les da lo mismo

un tipo de gobierno u otro! Los niveles de desconfianza en el sur y centro respecto del Congreso, la Iglesia Católica, el Poder Judicial, los partidos políticos son muy altos, bastante mayores que en el resto del país.

La gente no cree en el sistema. Pero esto se vincula no solo al carácter premoderno y subdesarrollado de nuestras instituciones, sino directamente a la calidad de la gestión gubernamental. Pues, paradójicamente, según el Latinobarómetro, la población estaba más satisfecha con la democracia en la época de Fujimori que ahora y, sobre todo, que en la época de Toledo. El recha-

zo al sistema es, en parte, el rechazo a la gestión del Gobierno, del presidente. Significa que el Gobierno no da la talla todavía en la lucha contra la pobreza y que la población no lo percibe como identificado con ella. En esa línea, el mal humor del sur es notorio. Si a en el ámbito nacional un 34% considera que estamos peor que al inicio del gobierno, en el sur ese porcentaje sube a 59%, y a un 71% los que opinan que estamos peor en control de la inflación.

Por eso no sorprende que, según esa encuesta, la fuerza política que está avanzando, en todo el país, sea el fujimorismo, y a costa principalmente del Apra, que baja seis

puntos en un año, mientras la simpatía por el fujimorismo sube siete puntos, pasando al segundo lugar junto con Unidad Nacional y Unidad Nacional/PPC, dejando en el cuarto puesto al Partido Nacionalista.

La gente quiere un gobierno que la ayude a integrarse, a crecer. Y la descentralización, concebida para saldar el divorcio con la sociedad, no marcha. La victoria que han obtenido los moqueguanos se convertirá en frustración antisistema nuevamente si el gobierno regional ejecuta solo el 24% del canon, como ocurrió el año pasado. Tanta lucha para ir a morir en brazos de la incompetencia burocrática. ■■